

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL COMITÉ FEDERAL

(9 de septiembre, 2012)

Transcurridos más de nueve meses desde las últimas elecciones generales y siete meses después del 38 Congreso del PSOE, celebramos la primera reunión del Comité Federal en un momento de máxima dificultad para España; con la angustia creciente de una ciudadanía que percibe ya no solo la magnitud de los problemas que le afectan sino también, y de manera palmaria, la incapacidad del Gobierno del PP para encauzarlos y resolverlos.

No hace ni un año desde la elección del nuevo Gobierno y, sin embargo, pareciera que ha transcurrido mucho más tiempo porque se han acumulado episodios inéditos en 35 años de vida democrática; y con el breve recorrido de estos meses, lo que ya es una certeza para todos, es que España se halla en una situación sustancialmente peor, mucho más grave, que la que existía en el mes de noviembre de 2011.

España está siendo arrastrada por la desastrosa gestión que el Gobierno lleva a cabo de la crisis económica. Y el precio, tanto en términos económicos como sociales, es muy elevado para el país. La política económica que se viene aplicando, pretende la recuperación económica a base de un ajuste a ultranza, sin medidas para el crecimiento, y con recortes sucesivos y crecientes del Estado del bienestar.

El Comité Federal considera que es una enorme equivocación del Gobierno depositar todas las expectativas de salida de la crisis en una estrategia que ya ha demostrado su fracaso, en España y en otros países de nuestro entorno, y que está provocando un enorme sufrimiento en la ciudadanía y deteriorando la cohesión social y territorial del país. Los efectos de las políticas aplicadas por el Gobierno se están haciendo notar de manera traumática en la vida de los ciudadanos españoles y sus secuelas permanecerán en el tiempo más allá del mandato de actual Gobierno.

El programa oculto con el que el PP se presentó a las elecciones se ha ido desvelando a toda velocidad con el paso de los meses. Una de las primeras muestras de ese engañoso programa ha sido la reforma laboral. Una auténtica contrarreforma, que ha abaratado el despido y precarizado el empleo de manera radical y que ha conseguido debilitar extremadamente la posición del trabajador ante el empresario. Lo cierto es que la mezcla de la recesión económica con esta reforma laboral ha provocado que en España haya más parados con menos derechos.

En materia presupuestaria, la gestión del Gobierno ha sido caótica e irresponsable. La presentación de los presupuestos fue retrasada deliberadamente por los intereses electorales del PP ante las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias. Los continuos cambios presupuestarios han instalado la política del ajuste intensivo e indiscriminado con oleadas sucesivas que han afectado de manera traumática a la sanidad (copago y quiebra de la universalidad del sistema público) y la educación (reducción del profesorado, de becas y ayudas y subida de tarifas universitarias), dando prácticamente por liquidado el sistema de atención a la dependencia que ya contaba con cientos de miles de beneficiarios. El incremento de los impuestos, singularmente del IVA e del IRPF, contraviniendo groseramente los solemnes compromisos del PP y de su candidato, al tiempo que se decretaba una Amnistía Fiscal inmoral que ha sido un

estrepitoso fracaso, están propiciando la contracción de la actividad económica y trasladando todo el coste de la crisis al ciudadano.

Y, junto a ello, el Comité Federal muestra su preocupación por la regresión extremadamente conservadora del Gobierno en materia de derechos y libertades. Una de las expresiones más emblemáticas, que no la única, es un planteamiento de contrarreforma de la actual legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo que anuncia un retroceso de un cuarto de siglo en los derechos de las mujeres. Ello prueba que las únicas promesas electorales que el Gobierno está dispuesto a cumplir son las que tienen que ver con la aplicación de políticas ligadas a una moral religiosa. De ahí la desfiguración de la asignatura de educación para la ciudadanía o la entusiasta adscripción del Ejecutivo al segregacionismo sexista en materia educativa, volviendo a planteamientos que pertenecían a un pasado remoto.

Y todo ello sin diálogo, no solo con la oposición política o los sindicatos, sino con cualquier otra administración o interlocutor representativo de sectores a los que esas políticas han alcanzado de lleno.

Los socialistas no podemos afirmar que muchas de las medidas aplicadas por el Gobierno nos hayan sorprendido porque responden de manera prácticamente literal, a los pronósticos que nuestro candidato había formulado a lo largo de la campaña electoral.

Tampoco ha sido sorprendente la rapidez con la que se ha perdido la confianza interna y externa en el Gobierno de España y en nuestra economía. En particular, en relación a nuestros socios europeos, difícilmente se podían hacer peor las cosas: desde el fatuo intento del Presidente del Gobierno de imponer un criterio de consolidación fiscal al margen de la reunión del Consejo Europeo, pasando por el irresponsable retraso en la presentación de los presupuestos, hasta la nefasta gestión de la crisis de Bankia que nos ha llevado al primer rescate, negado de manera inverosímil por un Presidente empeinado en presentar como un éxito lo que no era sino un gran fracaso que imponía duras condiciones a España.

En definitiva, la sucesión de improvisaciones y errores cometidos por el ejecutivo del PP ha deteriorado gravemente el crédito, la imagen internacional de nuestro país, y se ha traducido en un franco deterioro de la capacidad negociadora del Gobierno con las instituciones europeas e internacionales.

Una desconfianza que el propio Gobierno ha azuzado sobre las Comunidades Autónomas – es decir, sobre el sistema de vertebración territorial del país – sembrando dudas interesadas en relación con su capacidad de gestión y a las que, a través del Fondo de Liquidez, ha impuesto una modalidad de ayuda que es prácticamente idéntica a la que se aplica erróneamente en la UE.

Este manifiesto maltrato autonómico se encuentra estrechamente asociado a los planteamientos más conservadores de una derecha política que quiere encontrar en la crisis una coartada para el desmantelamiento del Estado de Bienestar que hoy garantizan las Comunidades Autónomas.

Del mismo modo el PP ha puesto en marcha una reforma del mundo local que culpabiliza de manera injusta a los ayuntamientos, y muy especialmente a los más pequeños, acabando con el principio de la autonomía local y amenazando con la desaparición de las entidades locales menores y las juntas vecinales.

Las reformas que se necesiten para conseguir mejor eficiencia y mayor austeridad en las distintas administraciones, no deben debilitar la capacidad del Estado de las Autonomías para seguir garantizando las políticas sociales que se gestionan con resultados altamente satisfactorios. Y el paso previo para acometer cualquier reforma debe ser, y así se lo demandamos al Gobierno, la búsqueda del consenso y la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, como ha sido reclamada reiteradamente por los presidentes socialistas. En el mismo sentido, las reformas que se acometan en los municipios deben preservar la autonomía local para prestar bienestar a los ciudadanos y han de destinarse a mejorar la capacidad de los ayuntamientos que han puesto de manifiesto su condición de referente institucional más próximo y cada vez con mayores responsabilidades en la vida cotidiana de los vecinos.

En este escenario tan preocupante, en el horizonte inmediato se cierne la práctica seguridad de alguna modalidad de rescate de la economía española, perspectiva ante la cual el Gobierno vuelve a reaccionar intentando esconder las negociaciones y naturaleza del rescate. El PSOE ha colaborado lealmente con los intereses generales del país y de sus ciudadanos movilizándolo sus relaciones con los socialistas europeos para contribuir a evitar la intervención. Por eso, el Comité Federal manifiesta que el PSOE se opondrá rotundamente a medidas que, con una u otra modalidad, se traduzcan en más condicionalidades y exigencias que tendrán como consecuencia mayores sacrificios para los ciudadanos a los que el Gobierno ha convertido en las víctimas principales de la crisis.

La defensa de los intereses de la mayoría social del país ha sido el eje que ha marcado la acción del Partido desde la celebración del 38 Congreso Federal. La responsabilidad de un partido con una irrenunciable vocación de Gobierno como el PSOE, nos lleva a tender la mano al diálogo para intentar acordar reformas en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, nuestra oposición va a ser firme y nítida ante los errores y desmanes del Gobierno, e intransigente con las políticas que suponen un desmontaje del Estado del bienestar y la desfiguración de los derechos amparados en nuestra Constitución.

En estos meses, desde el PSOE hemos denunciado los errores del Gobierno, la estrategia económica profundamente equivocada que sólo conduce a la recesión y las agresiones a la sanidad, la educación o la dependencia. También hemos respaldado con nuestra voz en las instituciones y con nuestra presencia, las movilizaciones y protestas de los sectores afectados. Y al mismo tiempo hemos formulado propuestas alternativas, ya sea en cuanto a la Reforma Laboral o los Presupuestos. Asimismo, hemos lanzado una campaña para defender la prórroga de la ayuda de 400 euros para desempleados, que sin duda han resultado determinantes para el cambio de posición del Ejecutivo y que son un ejemplo de oposición útil empeñada en trabajar para la ciudadanía.

El PSOE reitera su compromiso con los derechos de los ciudadanos; reclamamos un cambio de rumbo en la política económica, porque hay margen para una estrategia que combine austeridad y crecimiento, y nos opondremos de manera rotunda a cualquier

nuevo recorte y al desmantelamiento del Estado de Bienestar en el que está empeñada la derecha en España.

El PSOE ha cosechado dos importantes éxitos políticos con los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias que han permitido la consolidación de sendas mayorías de progreso. Ambos procesos electorales han puesto a prueba la solidez de nuestro partido y su capacidad para recuperar una confianza mayoritaria de los ciudadanos. Y, en estos pocos meses, los ejecutivos presididos por Jose Antonio Griñan y Javier Fernández están dando cuenta ante la ciudadanía que es posible poner en pie políticas alternativas y viables que no pasen por los recortes indiscriminados de los gobiernos autonómicos de la derecha.

En un contexto de enormes dificultades, enfrentando las imposiciones del Gobierno central, los socialistas en Andalucía, en Asturias y en el País Vasco así como en Canarias, representan para los ciudadanos una garantía para sus derechos y otra forma de afrontar la crisis. Y ello pese a la actitud sectaria del Gobierno que, en el caso de de Andalucía mantiene una posición de acoso y discriminación contra la Junta intentando frustrar las políticas dirigidas a más de ocho millones de ciudadanos que han respaldado mayoritariamente una opción de progreso. Los gobiernos socialistas tienen el reconocimiento y todo el apoyo del Comité Federal del Partido Socialista.

Los próximos meses vendrán marcados políticamente por la celebración de elecciones en el País Vasco y Galicia; dos Comunidades con muy diferentes situaciones en las que el PSOE aspira a ganar la confianza mayoritaria de los ciudadanos.

En el País Vasco, nunca antes un candidato a Lehendakari se presentó a la ciudadanía con un balance tan importante y positivo como el que tiene Patxi López. Ha sido con dos gobiernos socialistas, en España y en Euskadi, bajo los que se ha logrado el fin de violencia terrorista; un logro de extraordinario alcance político y social que ya forma parte de nuestra convivencia. Al tiempo, el Gobierno socialista puede mostrar un excelente balance de su tarea al frente de la gestión económica y de los intereses de los ciudadanos vascos, aportando además el valor de haber normalizado la vida de esa Comunidad Autónoma.

En Galicia, la derecha se muestra contumaz en la estrategia exhibida, y fallida, en los procesos electorales de Andalucía y Asturias: acompasar los recortes que planea el Gobierno de Rajoy a la celebración de los comicios, de tal modo que los ciudadanos acudan a las urnas sin conocerlos todavía, acometiéndolos con posterioridad al 21 de octubre. Los gobiernos del PP en España y en Galicia pretenden con el adelanto electoral ocultar a los gallegos la nueva oleada de recortes que, a buen seguro, afectarán a las pensiones de cientos de miles de gallegos. Los ciudadanos tienen la oportunidad de poner coto a este engaño así como a las políticas de Rajoy que Feijóo ha avalado y seguido fielmente, y respaldar la alternativa progresista encabezada por Pachi Vázquez.

Los resultados de las dos convocatorias deben marcar, además de lo que representa específicamente para las dos Comunidades y su ciudadanía, un momento de especial relevancia en el escenario político del país en su conjunto. Euskadi y Galicia son una oportunidad para que los ciudadanos reprueben la política del Gobierno de la Nación y también para dar el respaldo necesario a una mayoría progresista en Galicia y a quienes

han normalizado la convivencia y representan la opción de progreso y equidad en el País Vasco.

Apenas unas semanas después de ambos procesos electorales, el PSOE celebrará su Conferencia Política que, siguiendo la hoja de ruta de las resoluciones del 38º Congreso Federal, constituye la primera de una sucesión de convocatorias dedicadas a abrir, actualizar y modernizar nuestro proyecto político acercándolo a la mayoría social que queremos representar.

Un proceso de debate intenso, abierto a todos los afiliados y a un buen número de ciudadanos que quieren contribuir a la mejora de nuestras propuestas y que, en la cita del mes de noviembre, reflexionarán sobre los cambios que demanda la sociedad española. Cambios que afectan a la gobernanza del proyecto europeo, de nuestro país y de nuestra propia organización.

Cambios en las políticas, pero también en la política, a nivel europeo, estatal y en la propia organización.